

## MODERNIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN: UN DILEMA DEL DESARROLLO CHILENO\*

**Norbert Lechner**

El desarrollo histórico de Chile se caracteriza, según una interpretación conocida, por un relativo adelanto de la organización social y las formas institucionales respecto de los cambios en el nivel de la estructura económica. Hoy en día, señala Norbert Lechner en este artículo, Chile parece sufrir nuevamente una especie de desequilibrio, existiendo ahora un déficit de política en relación a la modernización económica. El desfase remite a un dilema de fondo: la modernización del país exige una conducción política del proceso en el momento mismo en que la democracia ve restringida sus capacidades políticas de conducir el desarrollo nacional.

*Para Paulina  
y en recuerdo a los debates  
del Grupo de los Jueves*

1. **A**níbal Pinto formuló a comienzos de los años sesenta una tesis que resumía el sentido común de una época. El desarrollo chileno, decía Pinto, “manifiesta desde antiguo un relativo adelanto de la organiza-

---

NORBERT LECHNER. Profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO.

\* Presentado en seminario “Pasado y Presente de la Sociedad Chilena”, Universidad Complutense, El Escorial, 1 de agosto 1996.

ción social y las formas institucionales respecto a los cambios en el nivel de la estructura económica”<sup>1</sup>. La interpretación no era novedosa; de hecho, los rasgos sobresalientes de la sociedad chilena a mediados del siglo XX ya eran notorios desde el siglo XIX. Si en América Latina en general el Estado construye a la nación, en Chile en particular, se constituye tempranamente (1833) un “Estado en forma”, capaz no sólo de expresar y racionalizar el predominio de clases de ese momento, sino de encauzar la posterior diversificación social y política. La preeminencia indiscutida de la oligarquía permitió dar espacio a la creciente pluralidad de fuerzas sociales y partidos políticos sin poner en riesgo el orden establecido. Cuando el surgimiento de una fuerte clase media y un combativo proletariado minero, productos de la conquista y expansión del salitre a fines del siglo pasado, amenazaban con desbordar el marco institucional, las reformas de 1925 adaptaron la institucionalidad a las necesidades de resolver democráticamente los conflictos sociales. El proceso de diferenciación social y de reformas políticas no se vio acompañado, en cambio, por una similar transformación de la estructura económica. La persistencia secular del latifundio y la ausencia de una burguesía “schumpeteriana” hacían depender el desarrollo económico de factores externos (el salitre y posteriormente el cobre se encontraban en manos extranjeras y dependían de los mercados mundiales). Este desequilibrio no logra ser revertido por el Estado cuando —a raíz de la crisis de 1929 y la II Guerra Mundial— inicia una industrialización sustitutiva de importaciones. El “Estado desarrollista” logra eliminar rezagos de la estructura productiva (reforma agraria) e incorporar a los sectores sociales marginados (campesinos, migración urbana) a la ciudadanía social, pero fracasa en su propósito de impulsar un crecimiento económico autosostenido. Fracasa la modernización vía industrialización y ello arrastra a la democratización. Los consiguientes conflictos sociales encuentran resonancia en el sistema político, que los magnifica en el clima de polarización ideológica propio de los años sesenta, provocando el quiebre de la democracia. Se cumple la primera y más regresiva alternativa visualizada por Aníbal Pinto en su análisis del desequilibrio tradicional de Chile: “la contención más o menos violenta de las presiones sociales con el objeto de ‘equilibrarlas’ con la base material”.

2. Nos falta todavía distancia histórica para hacer justicia a las diversas causas que llevaron al golpe militar en 1973 y, en particular, para evaluar adecuadamente el régimen militar de Pinochet. Sólo en una retros-

<sup>1</sup> Aníbal Pinto (1970). Para un análisis más detallado véase A. Pinto, *Chile* (1962). Una buena introducción ofrece Óscar Muñoz (1992).

pectiva de mayor alcance podemos analizar cómo se entrelazan las acciones deliberadas de los diversos actores con las transformaciones estructurales de onda larga para dar lugar a la conformación presente, así como para discernir en ésta qué elementos son transitorios y cuáles más duraderos. Como parte de los esfuerzos por poner el proceso chileno en perspectiva histórica, puede ser fructífero interpretar la situación actual a la luz de la interpretación de Aníbal Pinto. Propongo, pues, invertir su planteamiento y argumentar la siguiente tesis: si el desarrollo histórico de Chile se caracteriza por el desfase entre el avance de una institucionalidad política “a la europea” y el retraso de las estructuras económicas, hoy en día el dinamismo socioeconómico de la sociedad chilena contrasta con la inercia del campo político. *Chile parece sufrir nuevamente una especie de desequilibrio, existiendo ahora un “déficit” de política en relación a la modernización económica.* Vale decir, mientras las estructuras económicas se adaptan a la mundialización de los procesos y determinan las dinámicas de la vida social, la política se retrotrae, perdiendo poder de disposición sobre las formas de convivencia social. Se trata, por cierto, de una interpretación sumamente esquemática, cuyo único objetivo consiste en resaltar algunos rasgos del proceso actual.

3. La “retirada” de la política hace parte de una tendencia general, pero que en el caso de Chile, por su trasfondo histórico, es particularmente notoria. Para comprender la transformación en curso, cabe señalar que desarrollo político y desarrollo económico no suelen ser procesos congruentes. Por lo mismo es importante su grado de complementariedad. Al respecto, la historia chilena muestra tanto el papel privilegiado del Estado en la conformación del orden social como sus límites. En pocos países de la región ha sido tan marcado el ciclo “estadocéntrico” y tan evidente su agotamiento. El impulso estatal a la modernización tiene el efecto paradójico de socavar la preeminencia de la política. Dicha inflexión parece ser uno de los cambios subyacentes al golpe militar y la posterior ofensiva neoliberal, aunque en lo inmediato quedase escamoteado por el peso de la dictadura. En aquel momento, la pretensión explícita de despolitizar la vida social hace aparecer la retracción de la política como un acto represivo más del régimen. Una vez derrotado Pinochet en las urnas, no se restaura empero la política en su sitio preferencial. Precisamente el retorno al régimen democrático permite descubrir poco a poco que la política ya no es lo que fue. Recién ahora podemos apreciar la transformación subyacente. La primera ola de modernización, cuyo motor fue el Estado desarrollista, ha sido sustituida por una segunda fase, cuyo eje es el mercado. Mas ello no implica eliminar la intervención política. Por el contrario, la modernización presu-

pone la conducción política. Éste es el problema de fondo: ¿cómo asegurar una conducción política en una sociedad que ya no reconoce sin más la centralidad de la política? En Chile, como en toda sociedad moderna, observamos un proceso de *diferenciación funcional* en que política, economía y demás esferas de la vida social (derecho, ciencia, moral, etc.) adquieren una creciente autonomía, desarrollando racionalidades específicas y difícilmente compatibles entre sí. Ello cuestiona el “primado de la política”, es decir, pone en entredicho el papel del Estado y de la política como las principales instancias de representación y coordinación de la sociedad chilena.

4. La ofensiva neoliberal no sólo impuso a sangre y fuego una economía capitalista de mercado en contra de toda resistencia social (incluyendo la oposición inicial de los mismos empresarios, habituados al proteccionismo); en los hechos, dio lugar a una verdadera *sociedad de mercado*. Mucho más que otros países latinoamericanos, la sociedad chilena actual se caracteriza por ser, ante todo, una sociedad de mercado; o sea, una sociedad donde las reglas y dinámicas del mercado determinan la conducta, las expectativas y preferencias de la gente. La mentalidad del intercambio mercantil (el “toma y daca”) y el consiguiente predominio del dinero (como “equivalente general” de toda transacción) condicionan la vida cotidiana de todos los sectores sociales. Esta mercantilización desborda el ámbito económico y permea todas las relaciones sociales, incluyendo la acción política. Vislumbramos aquí una primera contradicción entre la modernización económica, guiada por la maximación de beneficios particulares, y la democratización política, referida al bien común (cualquiera sea su definición). Ella tiende a ser resuelta —bajo el signo neoliberal— mediante dos mecanismos: la privatización de la política, o sea, una política entendida como extensión de las estrategias privadas, y la instrumentalización del Estado en función de las exigencias de la economía de mercado. Al respecto, cabe recordar la paradoja neoliberal: como muestra fehacientemente el caso chileno, la estrategia neoliberal, cuyo propósito explícito es despolitizar a la economía, desmantelando al Estado, sólo tiene éxito allí donde ella se apoya en una fuerte intervención estatal. En efecto, el régimen militar de Pinochet poco tiene que ver con el Estado mínimo o subsidiario del discurso neoliberal. En la práctica, la experiencia chilena (como la de Europa Oriental) confirma el análisis histórico: el mercado por sí solo no genera ni sustenta un orden social. Disipadas las necesidades iniciales, no hay duda de que el buen funcionamiento del mercado presupone un adecuado marco institucional. Vale decir, la misma expansión del mercado vuelve a plantear la cuestión del Estado.

A mi entender, la reconstrucción de la democracia ha de ser vista también como una reconstrucción del Estado acorde a las nuevas circunstancias. Por ahora, el debate chileno me parece insatisfactorio. La noción de un “Estado regulador”<sup>2</sup> da cuenta de la necesaria inserción institucional del mercado, pero ignora el papel más vasto del Estado en la producción y reproducción de la sociedad por ella misma. La referencia casi exclusiva al mercado impide ver que la sociedad sólo se reconoce a sí misma en tanto orden colectivo por intermedio del Estado. Desconoce, por ejemplo, la totalización simbólica que efectúa el Estado a través del derecho, la escuela pública y otros mecanismos (desde el seguro social hasta el horario laboral) que permiten a la sociedad compartir representaciones colectivas, percepciones y expectativas similares, o sea crear un “sentido común”, y así generar la pertenencia a una comunidad de semejantes. Tal vivencia de un orden colectivo empero es socavada por la visión reduccionista (economicista) del Estado que reina en Chile. El país ha pasado sin reflexión alguna de una estadolatría nefasta a un antiestatismo no menos peligroso que ignora las bases del orden social.

5. Otra faceta de la paradoja radica en el *desajuste entre el gran dinamismo social y el carácter reactivo de la política*. La discontinuidad con el pasado está nuevamente a la vista. Aníbal Pinto como otros historiadores antes achacaron el subdesarrollo económico de Chile a la falta de capacidad empresarial. Pues bien, uno de los cambios más rotundos del Chile actual es el desarrollo de una “cultura empresarial” a la par con la expansión de la sociedad de mercado. En los últimos dos, tres lustros no sólo se ha consolidado un empresariado emprendedor con gran capacidad innovadora y una enorme autoconfianza; más sorprendente todavía (dado el estatismo tradicional) es la rapidez con que amplios sectores de la población han aprendido tal “cultura gerencial”, incluyendo un lenguaje que recurre constantemente a las claves del mundo de los negocios: competitividad, productividad, innovación, en fin, eficiencia. La visión empresarial de las cosas otorga a la vida social un dinamismo extraordinario, que se palpa en la vida cotidiana, sometida a una presión insaciable de “éxito”. Éste se mide, desde luego, en dinero y en consumo: tanto tienes, tanto eres. Todo deviene objeto de consumo, provocando una estetización antes desconocida del diario vivir. La acelerada circulación de bienes y símbolos es tal vez el signo más visible de una dramática aceleración del tiempo. El ritmo de vida deviene más y más vertiginoso al punto de girar, cual carrusel, sobre sí misma, a mayor velocidad, mas el tiempo se cristaliza en un

---

<sup>2</sup> Óscar Muñoz (1993).

presente permanente. Como señalara en otra ocasión<sup>3</sup>, la sociedad chilena vive un “presente omnipresente”, que reprime la memoria del pasado y reserva el futuro para proyectos/proyecciones individuales.

De cara a esta dinámica social, la política aparece inexorablemente lenta, anticuada y marginal. Lenta porque parece carecer de la flexibilidad y creatividad que exige la vida social a cada momento. Por lo mismo también anticuada, anclada en otra época y desfasada respecto a los afanes del presente. Finalmente, marginal porque es irrelevante, cuando no perjudicial para aquella dinámica social. No digo que esta imagen de la política sea justa; por el contrario, existe en buena parte de la clase política chilena una profunda inquietud por adaptar la acción política al nuevo contexto. No obstante, ese contexto es poco propicio. La diferenciación funcional, antes mencionada, impulsa la autonomía relativa de cada uno de los “subsistemas” dando lugar a dos tendencias: por un lado, provoca un descentramiento de la política que pierde su centralidad como núcleo rector del desarrollo social y, por el otro, restringe la capacidad política de intervenir en otras áreas. La racionalidad de la política queda cada vez más limitada al “subsistema político”, que parece regirse exclusivamente por una lógica autorreferencial. Gran parte del debate político se refiere a asuntos internos del sistema político (sistema electoral, designación de candidatos, continuidad de los senadores designados, etc.). Tal autorreferencia no es un rasgo típico de Chile. Así y todo, el desarrollo chileno permite apreciar con mayor nitidez que otros casos la relación problemática entre modernización y democratización. Estamos frente al siguiente dilema: si la diferenciación funcional limita el alcance de la política democrática, por otra parte, el proceso de modernización por sí solo no determina ni el rumbo ni el ritmo de su desarrollo. Los objetivos y, por ende, el sentido de la modernización han de ser determinados extensamente. Ésta es precisamente la tarea que se plantea la modernidad en tanto proceso de autodeterminación colectiva. Mientras que el régimen autoritario se caracterizó por una “modernización sin modernidad”, el régimen democrático conlleva la promesa de conducir el proceso de modernización acorde a la voluntad mayoritaria. Entonces se hace evidente la paradoja del desarrollo chileno: *la modernización económica del país remite a la elaboración democrática de opciones y decisiones acerca del desarrollo en el momento mismo en que la democracia ve restringida la capacidad política de conducir el desarrollo.*

6. Para apreciar el alcance de la paradoja hay que considerar el anverso de la medalla. La cara fea de la modernización nos muestra un

---

<sup>3</sup> Norbet Lechner (1994).

*proceso de disgregación social* acentuada. Ya no es la polarización político-ideológica que desgarró el país por largos años; hoy en día, la violencia es diferente, más cercana a un “darwinismo social”. La situación de pobreza en que vive un tercio de la población chilena es solamente la punta del *iceberg*. No menos relevante es que en pleno ciclo expansivo de la economía, con tasas mínimas de desocupación y una disminución del número de pobres, sin embargo, se incrementa la brecha entre ricos y pobres. Más allá de las condiciones de miseria en que vive un amplio sector de la población, llama la atención una fragmentación generalizada de la vida social. A la precarización radical del mundo laboral, que bajo la consigna de la flexibilización amenaza a todos los grupos socioeconómicos, se agrega una fuerte segmentación de la sociedad, cuya expresión más notoria es la estratificación implacable de la ciudad de Santiago. Particularmente en las grandes urbes, la vida social se desmigaja en una miríada de tribus y circuitos cerrados, sin mayor comunicación entre sí. En suma, a la par que los individuos conquistan espacios de libertad y creatividad antes desconocidos, también sufren el desmoronamiento de los lazos comunitarios, quedando expuestos al abandono y desamparo. Ahora bien, la experiencia histórica nos enseña que todo ello son aspectos intrínsecos al proceso de modernización y que, por consiguiente, no habría que asombrarse de los efectos laterales, no intencionales, que conlleva la expansión de una sociedad de mercado en Chile. Sin embargo, la misma experiencia histórica nos indica igualmente que tal agresión a la convivencia social tiende a desencadenar convulsiones explosivas. Aun cuando Chile no se encuentra amenazado por movimientos insurreccionales o regresiones fundamentalistas, me parece sintomático que la inseguridad sea de manera constante la principal preocupación ciudadana.

Desde los tiempos de la *polis* griega, la grandeza (y, muchas veces, la soberbia) de la política consiste en poner límites al destino. A través de la acción política los hombres buscan proteger el buen orden de su convivencia en contra de procesos supuestamente automáticos y desenlaces supuestamente irremediables. Desde entonces, la política democrática se encuentra estrechamente vinculada con la función protectora. Se espera de la política que otorgue por sobre todo seguridad, sea protegiendo la integridad física contra la violencia (Estado de Derecho), sea protegiendo las condiciones materiales de vida frente a desgracias imprevisibles (Estado Social). La política ha de brindar protección al individuo, pero también al orden colectivo; la seguridad individual es indisoluble de la seguridad colectiva. Pues bien aquí reside otro aspecto del desequilibrio chileno. A mi juicio, *el déficit de política en Chile tiene que ver con un déficit de seguridad*. No

me refiero tanto al problema de seguridad pública (cuya percepción es desproporcionada respecto a la criminalidad existente), ni siquiera a los problemas de la seguridad social (a pesar de las lagunas y desigualdades que conlleva su privatización), sino primordialmente a la seguridad simbólica. No por ser un bien intangible es menos real y apremiante. Por el contrario, la percepción de las amenazas a la seguridad pública y la seguridad social se encuentra condicionada por la mayor o menor seguridad simbólica; vale decir, por el grado en que cada individuo se siente reconocido en tanto parte de una comunidad de semejantes. Este lazo de pertenencia y arraigo, ya debilitado por la dictadura, ha seguido diluyéndose a raíz de la modernización, sin que la democratización haya logrado darle mayor espesor simbólico. El *animus societatis* se desvanece. Más allá de las garantías jurídicas, sin duda fundamentales, la política democrática no ha sabido investir el orden colectivo de ese halo protector indispensable para que los ciudadanos se sientan partícipes de una comunidad real y efectiva.

7. Profundizando lo anterior, observamos en Chile que el proceso de modernización fomenta no sólo una fragmentación estructural de la sociedad; también genera un *nuevo tipo de sociabilidad*. El ambiente competitivo de una sociedad de mercado, pero igualmente las experiencias traumáticas del pasado han dado lugar a un acentuado proceso de privatización, especialmente notorio en las grandes ciudades. En parte por miedo a revivir los conflictos de antaño, en parte debido a una nueva sensibilidad, la gente se retira del ámbito público para volcarse a estrategias individuales de logro y, en compensación, al goce de emociones compartidas en alguna “tribu”. Reina una “cultura del yo” (H. Béjar) que sabe aprovechar ágil y racionalmente las oportunidades de trabajo y consumo a la vez que desconfía de compromisos colectivos. Las antiguas solidaridades son desplazadas por un “individualismo negativo”. En resumidas cuentas, la vida social se encuentra determinada por la vida privada, la cual establece el horizonte de sentido. Una expresión de ello es la notable estetización de las relaciones sociales en Chile. En la medida en que se impone una “cultura de la imagen”, concediendo un lugar prioritario a la mirada, nuevos y continuamente cambiantes signos de distinción social se superponen a los clivajes de clase tradicionales. Más que por ocupación, educación, ingreso, la gente se distingue entre sí por la manera de hablar, por el tipo de ropa, de entretenimiento, etc., o sea, por características socioestéticas que (paralelo a la segmentación urbana) trazan líneas claras de diferenciación. Hoy en día, las divisiones de la sociedad chilena no son menores, pero parecen radicar más en las diferencias estético-culturales que en los intereses de clase. Es decir, la identificación con un grupo social y la distancia/oposi-



ción con otros grupos sociales se basan más en los “estilos de vida” y las distintas nociones de “buen gusto” que en las viejas identidades colectivas. Todo ello altera el carácter no sólo del espacio público, sino de la misma política.

La represión autoritaria de toda manifestación público-política ha ocultado una transformación cuya profundidad recién constatamos ahora cuando la democracia no restaura estos ámbitos en la forma que nos era familiar. No es que la joven democracia chilena no quiera o pueda restablecer dichos espacios. Más bien, habría que invertir el punto de vista: las esferas públicas y políticas han cambiado de forma y de contenido y ello modifica el tipo de democracia que podemos desarrollar en Chile. Actualmente, lo público ha dejado de ser el lugar privilegiado de la ciudadanía, de sus debates ideológicos, de sus manifestaciones de conflicto y adhesión. La presencia ciudadana ha sido reemplazada por la omnipresencia del mercado; también el debate político se orienta por la ley de oferta y demanda. Simultáneamente, una estetización de la vida, basada en la televisión, vacía a la política de argumentos; las buenas razones son sustituidas por la circulación de símbolos. ¿Qué significa entonces hacer política? Y por sobre todo: ¿qué hace entonces la política?

Lo público y lo privado dejan de ser planos opuestos y se entretejen en relaciones simbióticas. En la vía pública se cruzan consumidores, clientes, usuarios, espectadores; pocas veces ciudadanos. Es decir, los chilenos se interesan menos por la *res publica* que por la calidad de los servicios, por una oferta amplia y una atención correcta, por el montaje atractivo de los espectáculos. No podría ser distinto, dado el contexto tal cual es. La misma política se mimetiza con su entorno y termina inmersa en las dinámicas de mercantilización y estetización que permean la vida cotidiana. No cabe sorprenderse o quejarse, pero sí llamar la atención sobre los efectos. Por un lado, en un país que funciona como un gran mercado en que todos los bienes son transables, la política pierde fuerza normativa. En particular, ella pierde la capacidad de generar ese “cemento” ético-cultural que cohesionaba la sociedad “tradicional”. Por otro lado, donde una cultura de la imagen valora una estética de lo efímero y casual, la política encuentra más y más dificultades para encarnar las memorias del pasado y diseñar un horizonte de futuro. Ya no representa una instancia que asegure duración. En lugar de actuar sobre la contingencia (inevitable), termina siendo su caja de resonancia.

8. En los años ochenta dos procesos paralelos —la lucha contra el Estado autoritario y la expansión de la sociedad de mercado— desemboca-

ron en un *fortalecimiento de la sociedad civil*. Entendiendo por sociedad civil, de manera minimalista, la acción colectiva no estatal, observamos junto a las instituciones sociales tradicionales una verdadera explosión de organizaciones no-gubernamentales. Éstas son, en buena parte, los “activistas” de la dinámica social, desde el ámbito académico hasta la seguridad ciudadana, pasando por la defensa ecológica. No obstante, cabe matizar dicho auge de la sociedad civil. En primer lugar, juegan un papel primordial los llamados “poderes fácticos”, especialmente las fuerzas armadas y la Iglesia Católica, que gozan de una autonomía relativa conformando una zona gris entre Sociedad y Estado. En segundo lugar, conviene tener presente la estructura asimétrica de la sociedad civil. En el contexto actual, algunas organizaciones (gremios empresariales) tienen un poder de influencia (o veto) muy superior al de otras. Finalmente, quiero resaltar un aspecto sobresaliente para nuestro tema: *el fortalecimiento de la sociedad civil no conlleva una “ciudadanización” de la política*. A pesar de la mayor presencia de la sociedad civil, el ciudadano común no tiene mayor incidencia en el proceso político. El hecho suele ser atribuido a los arreglos cupulares del sistema político y/o la apatía de las masas. Tal explicación me parece demasiado fácil, pues no contempla las actuales transformaciones de la política.

Dada la nueva complejidad (incluyendo la diferenciación funcional antes mencionada) de la sociedad chilena, ni el Estado, ni el mercado, ni la sociedad civil tienen, por sí solos, la capacidad de conducir el desarrollo del país. Ninguna instancia por sí sola tiene la información suficiente, la inversión requerida y el poder de ejecución necesario para enfrentar los grandes problemas nacionales. Los principales proyectos (desde el desarrollo regional hasta la reforma del sistema de salud o la innovación tecnológica) requieren la cooperación de instancias gubernamentales, partidos políticos y actores sociales y económicos. Surgen así las redes de coordinación horizontal que articulan a los principales interesados en la resolución de determinada materia. Hoy por hoy, buena parte de la política realmente existente en Chile tiene lugar en tales redes políticas. Ahora bien, estas nuevas formas de coordinación transversal desbordan la institucionalidad política. Tiene lugar una *informalización de la política*, que para responder de modo eficiente a la complejidad social ha de emigrar de los canales institucionales. Las decisiones importantes suelen ser tomadas en la penumbra de las redes y comisiones *ad hoc*, mientras que el Congreso se limita a ratificar los acuerdos. Ello no sólo ilumina la debilidad del Poder Legislativo; también echa luz sobre las dificultades de elaborar consensos generales en una sociedad cada vez más diferenciada. La política informal

logra coordinar los intereses organizados de la sociedad, pero al precio de ignorar los intereses no organizados de la población. La referencia a un interés general se diluye y, por lo tanto, el marco habitual del debate ciudadano.

9. Las observaciones anteriores han hecho hincapié en algunas tendencias generales. Ello tiene la ventaja de relativizar la frecuente invocación del proceso chileno como un caso *sui generis* y así situarlo en un contexto más global. Visto así, los retos de Chile ya no aparecen como particularidades históricas y pueden ser enfrentados como problemas compartidos. En esta perspectiva resumiré los aspectos descritos en una reflexión más general sobre el desequilibrio del desarrollo chileno.

A mi juicio, Chile al igual que otros países de América Latina enfrentan el siguiente dilema: *responder simultáneamente a las exigencias de la modernización y de la democratización, siendo que los dos procesos obedecen a racionalidades diferentes, cuando no contrapuestas*. Chile no puede renunciar a la modernización sin condenarse a la marginalidad; tampoco puede renunciar a la democratización sin violentar la convicción mayoritaria. Por otra parte, los “imperativos” de la modernización no siempre corresponden a los valores democráticos ni la voluntad democrática concuerda siempre con las exigencias de la modernización. Éste es el dilema. *El gran desafío consiste en hacer compatible democratización y modernización*.

No solamente Chile, muchos países enfrentan el desafío. Predomina la tendencia a compatibilizar ambos procesos mediante la subordinación de la democratización a la modernización. Es decir: el desarrollo nacional se orienta según la lógica de la modernización, mientras que la democracia opera como un mecanismo legitimatorio que moviliza la adhesión popular acorde a los ciclos electorales. Se entrega al juego democrático la elección de las autoridades que, una vez instaladas en sus cargos, imponen las exigencias de la modernización al margen de todo debate político. Las consecuencias de tal división funcional del trabajo saltan a la vista. De este modo quedan escindidas las dos caras de la democracia: principio de legitimación y proceso de conducción. La democracia queda restringida a una democracia electoral a la vez que se entrega al gobierno la responsabilidad de hacer cumplir los “imperativos” técnicos de la racionalidad económica. En otras palabras, se aceptan alternativas políticas en la competencia electoral, pero se excluyen estrategias alternativas de modernización.

La tendencia a una democracia restringida ilumina un problema de fondo: la gobernabilidad democrática. No por capricho fue el tema prioritario de la Cumbre Iberoamericana en Santiago. Similar a los demás países

latinoamericanos, en Chile descubrimos que es diferente tener democracia a gobernar democráticamente. ¿Qué significa un proceso democrático de toma de decisiones en las nuevas condiciones sociales? Sabemos bien que el gobierno democrático ha de respetar los criterios básicos del “modelo económico”; en cambio, sabemos poco acerca de la conducción política de la modernización. Sigue pendiente el “otro ajuste”: adaptar las instituciones y los procedimientos democráticos a las profundas transformaciones de la sociedad como de la propia política. En caso contrario, el actual desfase entre democratización y modernización puede llegar a ser tan desgarrador como el desequilibrio analizado por Aníbal Pinto.

#### BIBLIOGRAFÍA

- Lechner, Norbert (1994). “Las sombras del mañana”. En *Estudios Internacionales*, Santiago.
- Muñoz, Óscar (1992). “Economía y sociedad en Chile. Frustración y cambio en el desarrollo histórico”. En *Revista Internacional de Ciencias Sociales* 134, UNESCO, París, diciembre.
- (ed.). *Después de las privatizaciones, hacia el Estado regulador*. Santiago: CIEPLAN.
- Pinto, Aníbal (1970). “Desarrollo económico y relaciones sociales”. En A. Pinto, *et al.*, *Chile, hoy*. Santiago; Siglo XXI. (Primera versión en el *Trimestre Económico* 120, México 1963).
- (1962). *Chile, un caso de desarrollo frustrado*. Santiago: Ed. Universitaria. □